

de marzo de 1998, en el recurso contencioso-administrativo número 3.409/96, en el que son partes, de una, como demandante, don Antonio Andújar Andújar, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 16 de septiembre de 1996, que desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 16 de mayo de 1996, sobre baja en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que estimando como estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Andújar Andújar, en su propio nombre, contra la Resolución dictada en fecha 16 de septiembre de 1996, por la Subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas, por delegación del Ministro del ramo, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de 16 de mayo anterior, del Director del Servicio Provincial en Almería de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (en lo sucesivo MUFACE), que acordó dar de baja al ahora recurrente como mutualista obligatorio, debe anular y anula las referidas resoluciones impugnadas, por no ser las mismas conformes al ordenamiento jurídico, y, en su virtud, debe declarar y declara el derecho del mencionado recurrente a conservar el régimen de afiliación a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), así como a causar baja en el Régimen General de la Seguridad Social, condenando a la Administración demandada a que regularice los descuentos efectuados en nómina desde el mes de diciembre de 1992 hasta la fecha de la regularización, con devolución al citado recurrente de las cantidades que puedan resultar a su favor, sin perjuicio de la aplicación de las normas que hayan sido dictadas con posterioridad a la fecha de las resoluciones que ahora se anulan; sin expreso pronunciamiento en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 27 de agosto de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general Técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

21544 *ORDEN de 27 de agosto de 1998 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-administrativo número 1.229/1995, promovido por don Mariano Pellicer Sangüesa.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado sentencia, con fecha 26 de mayo de 1998, en el recurso contencioso-administrativo número 1.229/1995, en el que son partes, de una, como demandante, don Mariano Pellicer Sangüesa, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 6 de julio de 1995, que desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 28 de febrero de 1995, sobre pensión de jubilación.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.—Declaramos la inadmisibilidad del presente recurso contencioso-administrativo número 1.229/1995, interpuesto por don Mariano Pellicer Sangüesa, contra las Resoluciones referidas en el encabezamiento de la presente sentencia.

Segundo.—No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 27 de agosto de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

21545 *ORDEN de 27 de agosto de 1998 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso-administrativo número 677/1996, promovido por don Israel Sánchez Rancel.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado sentencia, con fecha 30 de abril de 1998, en el recurso contencioso-administrativo número 677/1996, en el que son partes, de una, como demandante, don Israel Sánchez Rancel, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 5 de marzo de 1996, que desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 27 de octubre de 1995, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: Estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto, anulamos el acto impugnado por ser contrario a derecho, y declaramos el derecho del recurrente a que sean abonados los gastos que produjo el ingreso de su padre en el Hospital Universitario de Canarias con los intereses que correspondan; sin expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 27 de agosto de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

21546 *ORDEN de 27 de agosto de 1998 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número 1.822/1995, promovido por don José Luis Sánchez Viejo.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, con fecha 13 de abril de 1998, en el recurso contencioso-administrativo número 1.822/1995, en el que son partes, de una, como demandante, don José Luis Sánchez Viejo, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.